



RADAR LATAM 360

Dr. Daniel Zovatto

Presidente de LATAM ASESORÍA ESTRATÉGICA 360

Director-Editor de Radar Latam 360

EDITORIAL



Comprendiendo al Perú

Por profesor Luis Solari de la Fuente. Ex Primer Ministro - Perú.

RADAR LATAM 360 expresa su especial agradecimiento al profesor y ex Primer Ministro del Perú, Luis Solari, por su riguroso y exclusivo artículo publicado en el editorial de este sábado 11 de abril de 2026.

El proceso de “gran aceleración de la historia” que vive nuestro planeta, en su configuración como un mundo nuevo, ha convertido la bioceanidad geográfica de América Latina en una bioceanidad estratégica, al estar situada entre dos grandes océanos, Pacífico y Atlántico, y convertir la cuenca del Océano Pacífico en el lugar donde se produce el 65% de los bienes del planeta.

Tal es así, que desde el Indo Pacífico hasta el Pacífico Sur se han desarrollado múltiples acuerdos comerciales, económicos y militares en este océano, que va desde el Foro APEC hasta el tratado AUKUS que concedió submarinos nucleares a Australia.

Junto con la inmensa importancia geopolítica de América Latina, nuestra región es un territorio con población menos envejecida, rico en recursos naturales, agua dulce, tierra cultivable y biodiversidad, entre otros. Mucha potencia, con poca acción colectiva de nuestros países.

En esta nueva realidad mundial, la posición centro sudamericana del Perú en la Costa del Océano Pacífico, con sus más de 50 puertos marítimos, le concede una singularidad geopolítica que hace que las elecciones generales en curso y con primera vuelta el día de mañana, tengan tremenda importancia para nuestra región y el hemisferio.

Para comprender esta elección es indispensable conocer algunos elementos.

El Perú posee 196 provincias, de las cuales 146 son rurales y pobres. En la década de 1940 la población era 65% rural y 35% urbana, mientras que actualmente es 20% rural y 80% urbana. Esa migración se inició con concentración territorial del aparato productivo; luego dio paso a la de la población laboral y sus familias; y finalmente se concentró en el presupuesto. La descentralización peruana desde el 2001 desconcentró presupuesto y competencias, pero no la economía, que es la que realmente redistribuye la relación territorio, economía y población.

El sistema político electoral está construido alrededor de las 50 provincias urbanas, donde suelen movilizarse los partidos políticos, que llegan a los territorios rurales en tiempo electoral. Los pobladores rurales y pobres no tienen ninguna posibilidad de sostener económicamente un comité partidario. El financiamiento público a los partidos se dedica a capacitación, en vez de dedicarlo a presencia partidaria en zonas rurales (75% de las provincias) y que la población rural pobre tenga “vehículos” de expresión política.

Un país con alta ruralidad, como el Perú, necesita un sistema bicameral, pues la cámara de diputados es la cámara de representación territorial. La constitución de 1993, posterior al autogolpe de 1992, al convertir el parlamento en unicameral, quebró la relación entre Estado/Nación y territorio. Este domingo 12, después de 26 años, el Perú volverá a elegir Diputados y Senadores, luego de la reciente reforma Constitucional.

El Latinobarómetro 2023 indicó que en nuestra región se vive un “desplome del desempeño de los gobiernos” y en su edición 2021 señaló que América Latina vive una “ola de ausencia de mayorías”. Ahora sabemos bien que esta segunda es la consecuencia de la primera, unidas ambas en una suerte de círculo vicioso.

El citado Informe 2021 advertía una situación compleja con “creciente atomización de los parlamentos, aumento de movimientos y partidos nuevos, así como el fin de las viejas organizaciones políticas. La gobernabilidad se aleja, augurando tiempos complejos para la región”.

Al Perú le ha tocado vivir esta terrible complejidad desde el 2011, llegando al extremo de tener desde julio de 2021 cuatro presidentes, doce presidentes del consejo de ministros y más de 150 ministros de Estado.

En el Perú, solo 1 de cada diez peruanos está satisfecho con la democracia (Latinobarómetro 2024), mientras que para el Barómetro de las Américas decrece precisamente desde 2012 (52%), siendo 18% en 2025/2026.

Ante la escasez o ausencia de control político al poder Ejecutivo por parte de los parlamentos de la región, se ha hecho visible la impotencia de la sociedad civil -poco organizada y débil- para hacer control político social y contrapeso al Estado. Esta ausencia de control político a los gobiernos es la

causa primaria de que estos se olviden de la gente y de sus promesas electorales, produciendo ese desplome del desempeño.

La sociedad civil peruana ha vivido esa impotencia ante las componendas entre parlamento y Ejecutivo, pactando por intereses particulares y postergando la solución a los problemas del país.

Es el mismo electorado que va votando por distintos candidatos y proyectos políticos, que prometen la solución a todos los problemas, pero que después de ganar las elecciones incumplen sus promesas.

Una política pública se construye aplicando un triángulo. Primero, el principio de primacía de la realidad, con el que se establece lo que hay que cambiar. Segundo, el servicio civil con los funcionarios públicos. Tercero, la sociedad civil, con la cual se construye la política pública; así la gente se convierte en el mejor fiscalizador. Una política pública no es pública porque la ejecute el Estado. Es pública porque se construye con la gente para la gente. Si no se usa este triángulo, la política pública tiende a fracasar. Peor aún si la política pública no genera intangibles como unión o fraternidad, entre otros.

El Perú no tiene una sociedad civil fuerte ni organizada. Tampoco posee servicio civil, que fue cancelado por ley en 1995, prohibiendo además a los funcionarios que trabajasen en el Estado durante los cinco años siguientes. No hay forma de que un gobierno no tenga mal desempeño.

El mal desempeño del gobierno significa desconfianza en las instituciones. Inexorablemente esa desconfianza producirá altos niveles de votantes indecisos.

Este es el escenario peruano que ha producido 12 grupos en el parlamento en funciones y 35 candidatos a la presidencia de la República de cara a estos comicios.

Con una campaña electoral absolutamente fría y con 57% de votantes indecisos un mes antes del día de la primera vuelta y 38% una semana antes, los candidatos se separaron rápidamente en tres grupos, caracterizados por una alta volatilidad en la intención de voto y diferencias estrechas entre ellos: dos candidatos liderando —Fujimori y Álvarez— un grupo intermedio de 6 candidatos —Belmont, López Aliaga, Nieto, Sánchez, López Chau y Pérez Tello—, y el resto más alejado.

Aunque los indecisos están constantemente ubicados en 4 áreas de los estudios: jóvenes menores de 24, mujeres, en territorios Norte y Sur, y en sector D/E, los candidatos parecen no haberse enfocado en estos grupos. Quizás por tener campañas de bajo presupuesto, quizás por campañas poco profesionales o quizás por temor a estimular a que se manifieste el anti voto, como mostró un estudio de principios de marzo.

Uno de los elementos más relevantes, es la alta probabilidad de que varios partidos elegidos en el 2021 para el parlamento, en esta elección 2026 sufran un castigo social y pierdan su inscripción por no pasar las tres vallas electorales (presidencia, diputados y senado). No solo habría castigo para sus candidatos presidenciales, sino que también podrían ser apartados del nuevo parlamento. La pregunta es si ese castigo social en las urnas alcanzará también a los dos partidos más importantes en el parlamento electo en el 2021, al ser considerados por el electorado como corresponsables de la situación actual.

Estamos ante una elección histórica no solo por la relevancia geopolítica del Perú y sus implicancias para la región y el hemisferio, sino también porque parecíamos estar ante el despertar de una nueva sociedad civil que verdaderamente tome la conducción del país.

Este vaticinio solo será verificable cuando el 28 de julio veamos qué gabinete ministerial juramenta y si sus integrantes son capaces de reconstruir una patria justa, fundada en la verdad y la fraternidad.

Radar Político



Cuba: El dictador Miguel Díaz-Canel reafirmó que no contempla abandonar el poder pese a las crecientes presiones de Estados Unidos, al declarar que “renunciar no forma parte de nuestro vocabulario” y subrayar la soberanía e independencia del país frente a cualquier intento de injerencia externa. En una entrevista con NBC, el mandatario rechazó la idea de dimitir a cambio de un alivio de las sanciones y defendió la legitimidad del sistema político cubano. Sus declaraciones se producen en medio de un endurecimiento de la política de Washington, que desde enero ha impuesto un bloqueo de combustible agravando la crisis energética en la isla, con apagones prolongados que afectan servicios básicos, hospitales y la ya debilitada economía. En este contexto, Díaz-Canel combinó una postura firme con una apertura condicionada al diálogo, al señalar que Cuba está dispuesta a negociar con Estados Unidos, pero “sin presiones ni intentos de intervención”. La escalada de tensiones ha estado marcada por declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de “tomar Cuba” y por la presión de su secretario de Estado, Marco Rubio, que insiste en la necesidad de cambios estructurales en la isla. Aunque el Gobierno cubano ha respondido con gestos como la liberación de más de 2.000 presos políticos y anuncios de reformas económicas, Washington los considera insuficientes. En este escenario, el pulso entre coerción externa y resistencia interna configura un equilibrio inestable donde el régimen busca sostenerse sin ceder en lo esencial, mientras deja abierta la puerta a un diálogo limitado.

🌐 Díaz-Canel: “Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario”

Argentina: El gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario complejo donde los avances económicos conviven con crecientes tensiones políticas y judiciales, especialmente a raíz de denuncias de corrupción y el escándalo de la criptomoneda \$Libra. Aunque la reducción de la inflación y la baja reciente de la pobreza ofrecen señales positivas, persisten fragilidades estructurales vinculadas al empleo, los ingresos y la sostenibilidad social del ajuste. En este contexto, el oficialismo apuesta a sostener el rumbo económico durante una ventana de tiempo limitada antes del ciclo electoral, acelerando reformas de desregulación y apertura que buscan consolidar la transformación del modelo productivo. Sin embargo, la estrategia enfrenta múltiples riesgos: caída de la recaudación, impacto social del ajuste, tensiones por la apertura a importaciones y el desafío de sostener la competitividad de la industria local. A ello se suma un entorno internacional incierto, con presiones sobre los precios energéticos y efectos inflacionarios potenciales. Mientras el Gobierno impulsa una profunda reforma del Estado y una reconversión económica de largo alcance, surgen interrogantes sobre su viabilidad política y social, en un país donde amplios sectores aún arrastran secuelas

estructurales de crisis anteriores. En este escenario, el éxito del proyecto dependerá no solo de los resultados económicos, sino también de la capacidad de gestionar costos sociales y evitar que los conflictos políticos y judiciales erosionen el capital político acumulado.

🌐 Luces y sombras en el país de Milei

Chile: A poco tiempo de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, comienzan a evidenciarse fuertes señales de desorden, improvisación y desconexión con la realidad, reflejadas en decisiones contradictorias, anuncios revertidos y una débil estrategia comunicacional. La imagen de una vocera evitando a la prensa simboliza, según el análisis, un gobierno que oscila entre la retórica de control y una gestión errática, marcada por cambios constantes en políticas públicas, desde recortes presupuestarios hasta decisiones administrativas clave. Esta dinámica responde, en parte, a una sobreinterpretación del triunfo electoral, entendido como un mandato para aplicar un programa de shock neoliberal sin suficiente sustento técnico ni político. La falta de experiencia en cargos clave, el predominio de leales sobre expertos y la concentración de poder en el área económica han profundizado la percepción de amateurismo y debilidad en la conducción gubernamental. En este contexto, el Ejecutivo ha optado por postergar el ingreso de su principal proyecto legislativo —el denominado “Plan de Reconstrucción Nacional”, rebautizado como reforma de reactivación económica— con el objetivo de alinear al oficialismo y evitar errores en su tramitación. La iniciativa, que contempla más de 40 medidas en áreas como impuestos, seguridad, educación y crecimiento, enfrenta tensiones internas y cuestionamientos políticos, especialmente en medio de una crisis por el alza del petróleo y episodios de violencia que han obligado a priorizar la agenda de seguridad, particularmente en colegios. El gobierno busca así ganar tiempo para afinar el proyecto y fortalecer apoyos, mientras intenta ordenar su estrategia política y legislativa. Sin embargo, el retraso refleja también las dificultades de gestión y coordinación en una administración que, tras sus primeras semanas, enfrenta crecientes dudas sobre su capacidad de gobernar con eficacia y coherencia.

🌐 Un gobierno en fuga - La Tercera

Chile: El arribo de José Antonio Kast a La Moneda ha reabierto el debate sobre una eventual reconfiguración del oficialismo, con discusiones en torno a la creación de una nueva coalición que integre a los partidos de derecha y centroderecha. El futuro de Chile Vamos aparece condicionado por la situación de Evópoli, que enfrenta un proceso ante el Tribunal Calificador de Elecciones que podría definir su continuidad, mientras en el sector surgen distintas posturas sobre si mantener la alianza tradicional o avanzar hacia un nuevo bloque político más amplio. A esto se suma la incertidumbre interna en Evópoli, donde conviven opciones que van desde reconstruirse como partido hasta integrarse a otras colectividades. En paralelo, algunos dirigentes han comenzado a explorar alianzas más amplias que incluyan a sectores como Demócratas, ampliando el espectro político del oficialismo. Mientras algunos dirigentes impulsan fortalecer una coalición que incluya al Partido Republicano y otros sectores, con miras a consolidar un proyecto político de largo plazo, otros resisten la idea y prefieren preservar la identidad y autonomía de las colectividades existentes. Las diferencias internas, sumadas a la falta de definición estratégica, reflejan un oficialismo en proceso de reordenamiento, donde la coordinación gubernamental y las próximas elecciones serán determinantes para definir si se avanza hacia una nueva coalición o se mantiene el esquema actual. En este contexto, también emergen tensiones sobre el liderazgo político y la conducción del gobierno, así como sobre la conveniencia de acelerar o postergar este debate. El desempeño del oficialismo en los próximos procesos electorales, especialmente hacia 2028, será clave para definir la viabilidad de una coalición

más amplia y cohesionada.

🌐 ¿Nueva coalición? El reordenamiento oficialista tras el arribo de Kast a La Moneda - La Tercera

Argentina-Chile: La primera reunión bilateral entre Javier Milei y José Antonio Kast confirmó una fuerte sintonía ideológica y política entre ambos mandatarios, marcada por su afinidad en torno a valores como la libertad económica, la democracia y el rol del sector privado.

Durante el encuentro en la Casa Rosada —precedido por una reunión a solas y luego ampliado a equipos de gobierno— se acordó avanzar en una agenda estratégica centrada en la atracción de inversiones, la expansión del comercio bilateral, la integración energética y minera, y la apertura a nuevos mercados. Este acercamiento se da en un contexto de creciente intercambio económico entre ambos países, que en los últimos años casi se duplicó. Además, Kast expresó su respaldo al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, reforzando la convergencia política entre ambos gobiernos. Sin embargo, la reunión estuvo atravesada por un tema sensible que tensó el clima bilateral: la fuga del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, cuya extradición había sido firmada recientemente por el gobierno argentino. Pese a los esfuerzos de las autoridades —incluidos allanamientos y una recompensa para facilitar su captura— el prófugo no ha sido localizado, lo que generó inquietud en la delegación chilena. Kast agradeció los avances de Argentina en el caso, aunque reconoció la falta de certezas sobre una pronta detención. Paralelamente, la defensa de Apablaza acudió a instancias internacionales denunciando un posible proceso ilegal, lo que añade complejidad al caso. Así, el episodio se convirtió en un “trago amargo” dentro de una visita que, en términos generales, buscó consolidar una alianza política y económica entre dos gobiernos alineados ideológicamente.

🌐 Milei recibió a Kast: sintonía ideológica e inversiones, con la fuga de Apablaza como trago amargo

Costa Rica: La presidenta electa Laura Fernández Delgado anunció que iniciará su mandato el próximo 8 de mayo con dos decretos clave orientados a reorganizar el Poder Ejecutivo y definir la agenda legislativa desde el primer día.

El primero estará enfocado en reestructurar el funcionamiento interno del Gobierno, estableciendo con mayor claridad las funciones de los vicepresidentes, la organización de los ministerios y el rol de los llamados “ministros rectores”, quienes coordinarán áreas estratégicas como Ambiente, Educación y Seguridad. Esta medida busca mejorar la coordinación institucional, reducir duplicidades y acelerar la ejecución de políticas públicas, aunque también abre interrogantes sobre una eventual mayor concentración de poder dentro del Ejecutivo. El segundo decreto permitirá al Gobierno controlar la agenda del Congreso durante el período de sesiones extraordinarias, impulsando proyectos considerados prioritarios en materia económica y social. Entre ellos destacan iniciativas como el desarrollo del proyecto minero Crucitas, las jornadas laborales 4x3, la construcción de la Marina de Limón y reformas en el mercado eléctrico. Asimismo, Fernández adelantó que retomará proyectos pendientes del actual Gobierno, incluyendo créditos para infraestructura, resiliencia climática y otras reformas en trámite. Estas decisiones configuran un inicio de gestión con una hoja de ruta clara y un fuerte componente político, orientado a marcar ritmo desde el comienzo y a acelerar la aprobación de reformas clave, cuyo éxito dependerá del respaldo que logre en la Asamblea Legislativa.

🌐 Laura Fernández anuncia sus primeros decretos: reorganizará el Ejecutivo y definirá la agenda le...

México: El nuevo canciller Roberto Velasco Álvarez asumió el cargo con una agenda internacional cargada de desafíos, marcada por la relación con Estados Unidos, la renegociación del T-MEC, la migración y las tensiones con la ONU. Su nombramiento, impulsado

por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobado en el Senado tras una comparecencia en la que dejó en claro que la prioridad será gestionar el vínculo con el presidente Donald Trump, especialmente en materia comercial, seguridad y control del narcotráfico. Velasco deberá también enfrentar el impacto de las políticas migratorias estadounidenses, incluidas redadas y detenciones de mexicanos, en un contexto de debilidad estructural de la red consular. En paralelo, su gestión comienza atravesada por el choque entre el Gobierno mexicano y la Organización de las Naciones Unidas por el informe sobre desapariciones forzadas, un tema que tensiona la política exterior y genera críticas internas. Además de la agenda bilateral con Estados Unidos, el nuevo canciller deberá gestionar múltiples frentes simultáneos: la crisis en Medio Oriente, la relación con Cuba, la cooperación regional en América Latina y la preparación del Mundial de fútbol como vitrina internacional. Velasco reafirmó los principios tradicionales de la diplomacia mexicana —no intervención y respeto a la soberanía— en un contexto global marcado por el debilitamiento del multilateralismo. También anunció el respaldo político a la revisión del T-MEC junto al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la continuidad de acciones contra el tráfico de armas hacia México. Su llegada se produce en un entorno de alta presión política y diplomática, donde deberá equilibrar tensiones externas, demandas internas y una creciente exposición internacional del país, con el desafío de proyectar una política exterior más activa en un escenario global cada vez más inestable.

🌐 Trump, el TMEC y las diferencias con la ONU marcan la agenda del nuevo canciller de México

México: La presidenta Claudia Sheinbaum viajará la próxima semana a Barcelona para participar el 18 de abril en una reunión internacional de gobiernos progresistas, convocada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y que contará con la presencia de líderes como Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Yamandú Orsi. Aunque no se trata de una visita bilateral, el viaje adquiere una fuerte carga simbólica al ser el primero de un presidente mexicano a España en ocho años, marcando el inicio de una recomposición de las relaciones diplomáticas tras un prolongado período de distanciamiento. Este enfriamiento se originó en 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Corona española una disculpa por los abusos de la Conquista, lo que derivó en tensiones que Sheinbaum heredó y profundizó al no invitar al rey Felipe VI a su investidura en 2024. En los últimos meses, ambos países han impulsado gestos graduales para superar este desencuentro, en un contexto donde las relaciones económicas, culturales y humanas siguen siendo intensas. Un punto de inflexión fue la reciente declaración del rey Felipe VI reconociendo abusos y controversias éticas durante la colonización, sin llegar a una disculpa formal, lo que fue interpretado como una señal de apertura. Posteriormente, Sheinbaum invitó públicamente al monarca al Mundial de fútbol de 2026, consolidando el deshielo. La participación de la mandataria en la cumbre “Global Progressive Mobilisation”, que reunirá a más de un centenar de líderes, activistas y académicos de más de 40 países, se inscribe así en una doble lógica: reforzar alianzas progresistas a nivel global y consolidar la normalización de los vínculos con España tras años de tensiones diplomáticas.

🌐 La presidenta de México viaja a España la próxima semana para reunirse con Sánchez, Lula y P...

Colombia-Ecuador: La crisis diplomática entre ambos países escaló tras la decisión del presidente Gustavo Petro de ordenar el regreso inmediato de su embajadora en Quito, en respuesta al aumento del 100% en los aranceles fronterizos impuesto por su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa. La medida ecuatoriana se sustenta en acusaciones de que Colombia no combate eficazmente el narcotráfico, lo que Petro rechazó tajantemente, defendiendo los resultados

de su Gobierno en incautaciones y reducción de cultivos ilícitos. En paralelo, el mandatario colombiano calificó la decisión arancelaria como una “monstruosidad” y sugirió incluso la salida de Colombia del Pacto Andino, planteando un giro estratégico hacia Mercosur, el Caribe y Centroamérica. El conflicto se inscribe en una escalada previa de tensiones, que incluyó el llamado a consultas del embajador ecuatoriano en Bogotá tras las declaraciones de Petro defendiendo al exvicepresidente Jorge Glas como “preso político”, lo que generó una fuerte reacción en Quito. Noboa endureció su postura, cuestionando el compromiso colombiano contra el narcotráfico y sugiriendo que un futuro gobierno podría facilitar el diálogo. Petro, por su parte, contraatacó señalando debilidades en los controles portuarios ecuatorianos y aludiendo incluso a presuntos complots en su contra vinculados al narcotráfico. En este contexto de creciente confrontación, el sector empresarial colombiano alertó sobre el impacto económico de las medidas y llamó a ambos gobiernos a actuar con serenidad y responsabilidad ante una crisis que amenaza con deteriorar aún más las relaciones bilaterales.

🌐 Petro ordena el regreso de su embajadora en Quito tras el aumento de aranceles impuesto por N...

Colombia: La diplomacia del presidente Gustavo Petro volvió a generar tensiones internacionales tras una serie de mensajes en la red X que abrieron frentes simultáneos con Nayib Bukele y Daniel Noboa. Petro criticó duramente la política carcelaria salvadoreña, calificándola como un “crimen contra la humanidad”, lo que provocó una respuesta irónica de Bukele, quien incluso propuso trasladar a los presos de su país a Colombia. Paralelamente, el mandatario colombiano cuestionó la situación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien calificó como “preso político”, intensificando el choque con el Gobierno ecuatoriano. Las declaraciones derivaron en una reacción diplomática más contundente por parte de Ecuador, que envió una nota de protesta formal, exigió respeto a su soberanía y llamó a consultas a su embajador en Bogotá, un gesto que refleja un deterioro significativo en la relación bilateral. El gobierno de Noboa rechazó las acusaciones, defendió la legalidad de la condena contra Glas y cuestionó la política de seguridad colombiana en la frontera. Estos episodios se inscriben en un patrón más amplio de la política exterior de Petro, marcada por intervenciones directas en redes sociales que han generado fricciones recurrentes con distintos gobiernos y han obligado a posteriores gestiones diplomáticas para contener las crisis.

🌐 La diplomacia de Petro en redes sociales abre nuevos frentes con Bukele y Noboa

Venezuela: El chavismo consolidó su control sobre el sistema de justicia al designar a Larry Devoe como nuevo fiscal general y a Eglée González Lobato como defensora del pueblo, en una votación dominada por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional y sin respaldo pleno de la oposición. Devoe, quien ya ejercía como fiscal encargado tras la renuncia de Tarek William Saab luego de la captura de Nicolás Maduro, continuará al frente de las causas judiciales, incluidas aquellas contra opositores. Su designación genera desconfianza entre sectores críticos, dado su historial de negación de violaciones de derechos humanos y su cercanía con el Gobierno. El proceso de selección estuvo marcado por cuestionamientos de irregularidades y la exclusión de candidatos promovidos por la oposición y la academia, que abogaban por perfiles independientes. En paralelo, la elección de González Lobato como defensora del pueblo fue presentada por el oficialismo como un gesto de apertura, aunque su cargo tiene limitado peso político y no supone, en principio, cambios sustanciales en un sistema judicial fuertemente subordinado al Ejecutivo. Las designaciones se producen tras semanas de negociaciones en un contexto donde la oposición parlamentaria, fragmentada y minoritaria, no logró incidir en las decisiones finales. En este escenario, lejos de anticipar una transformación institucional, los nuevos nombramientos refuerzan la continuidad del

modelo de control político sobre la justicia, en un momento clave en el que se discute la posibilidad — aún incierta— de una eventual transición en Venezuela.

🌐 El chavismo designa nuevo fiscal general en Venezuela

Venezuela: Manipulación constitucional para evitar elecciones y consolidar un poder sin legitimidad. A tres meses de la captura de Nicolás Maduro, Venezuela atraviesa una de las crisis institucionales más graves de su historia contemporánea, marcada por un vacío de poder que el régimen intenta administrar mediante artificios jurídicos. La figura de “ausencia forzosa”, introducida por el Tribunal Supremo de Justicia, ha sido utilizada para evitar la declaración de falta absoluta y, con ello, la convocatoria obligatoria a elecciones presidenciales. En la práctica, Delcy Rodríguez ejerce el poder de facto, tomando decisiones estructurales —incluidos cambios en el gabinete— que evidencian una ausencia real del mandatario. La Constitución es clara al establecer que, tras 90 días de ausencia, debe evaluarse la falta absoluta y convocar elecciones en un plazo de 30 días, pero la Asamblea Nacional ha optado por no pronunciarse, evidenciando una estrategia deliberada para bloquear cualquier transición democrática. Este entramado institucional no solo erosiona aún más la legitimidad del régimen, sino que también incrementa la presión interna y externa, en un contexto donde la crisis política venezolana se redefine bajo nuevas condiciones.

🌐 “Ausencia forzosa”: la excusa del chavismo para no declarar falta absoluta en Venezuela

Radars Electoral



Perú: El país andino llega a las elecciones más complejas de su historia reciente con una combinación explosiva de fragmentación política, debilidad institucional y desencanto ciudadano. Con 35 candidatos presidenciales y una oferta electoral dispersa y de baja calidad, el proceso refleja un sistema político erosionado, incapaz de canalizar demandas sociales crecientes. Diversos analistas advierten que no se trata de un punto de inflexión, sino de la continuidad de un ciclo de inestabilidad que ya suma ocho presidentes en una década. En efecto, la oferta electoral es considerada una de las más pobres en décadas, en un contexto donde coinciden los problemas más graves del país —inseguridad, corrupción, inestabilidad institucional— con liderazgos débiles, improvisados o meramente oportunistas. Lejos de ofrecer alternativas claras, la proliferación de candidaturas responde a incentivos perversos del propio sistema político, que favorece el personalismo y la competencia fragmentada, mientras el electorado muestra apatía, indecisión y una creciente sensación de resignación. La campaña ha derivado en un espectáculo más que en un debate programático, con candidatos outsiders —como el humorista Carlos Álvarez— capitalizando el descontento. En paralelo, Keiko Fujimori vuelve a perfilarse como figura central en una eventual segunda vuelta, lo que perpetúa la lógica de polarización y rechazo que ha marcado las últimas elecciones. El resultado, altamente incierto, difícilmente altere las bases estructurales de la crisis política peruana. Lo único cierto en este contexto de máxima incertidumbre es que habrá necesidad de disputar una segunda vuelta el 7 de junio para definir la presidencia. En este escenario de máxima complejidad, la comunidad internacional —incluyendo la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter—

aparece como un actor clave para observar y monitorear el proceso y resguardar su integridad, en un país donde la democracia sigue funcionando formalmente, pero con bases cada vez más frágiles y alta inestabilidad. 🌐 Perú ante sus elecciones más inciertas

Perú: A pocos días de las elecciones presidenciales del 12 de abril, Keiko Fujimori lidera las encuestas con alrededor de 14% de intención de voto, aunque muy lejos de asegurar un triunfo en primera vuelta, en un escenario altamente fragmentado con 35 candidatos y un elevado nivel de indecisos que oscila entre el 25% y casi el 40%. Sus principales competidores son Rafael López Aliaga, representante de la derecha ultraconservadora, y Roberto Sánchez Palomino, candidato de izquierda que ha mostrado un crecimiento reciente en las encuestas. La complejidad del proceso electoral —con múltiples cargos incluidos en una sola papeleta— ha generado confusión entre los votantes, al punto de que una gran proporción no sabe cómo emitir su voto. En este contexto, el voto en blanco y la indecisión se posicionan como las principales tendencias en los sondeos, reflejando el desgaste del sistema político y la desconexión entre ciudadanía y oferta electoral. En paralelo, el país mantiene un desempeño económico relativamente sólido, impulsado por la minería, el agro y una política monetaria estable, aunque este crecimiento convive con un deterioro significativo de la seguridad, evidenciado en el aumento de homicidios, extorsión y cultivos de coca. En este contexto, el discurso de orden gana centralidad en la campaña y podría favorecer a Fujimori, especialmente ante el cambio en la percepción sobre su padre, Alberto Fujimori, cuya muerte ha reducido parte del rechazo histórico al fujimorismo. Aun así, la candidata enfrenta el desafío de revertir su historial de tres derrotas en segunda vuelta, en una contienda abierta y marcada por alta volatilidad e incertidumbre.

🌐 ¿La cuarta es la vencida? Keiko Fujimori busca romper su racha de derrotas y gobernar Perú sin l...

Perú: Días antes de las elecciones generales del 12 de abril, un nuevo simulacro de votación de Ipsos confirma el liderazgo de Keiko Fujimori, quien encabeza las preferencias con 18.6% de los votos válidos, consolidando una tendencia al alza en el tramo final de la campaña. La principal novedad es el ascenso de Carlos Álvarez al segundo lugar con 12.1%, desplazando a Rafael López Aliaga, quien cae al tercer puesto con 10.9% tras una fuerte pérdida de apoyo. El reordenamiento responde en parte al impacto de los debates y a la volatilidad del electorado, especialmente en Lima, donde Álvarez ha capitalizado votos clave. Este escenario confirma una contienda abierta, con cambios significativos en las posiciones y sin un segundo lugar consolidado de cara a una probable segunda vuelta. Más atrás se ubican otros candidatos como Roberto Sánchez, Jorge Nieto y César Acuña, en una competencia fragmentada donde varios aspirantes mantienen opciones, aunque con menor respaldo. El movimiento en las preferencias también se refleja en la proyección del Senado, donde el ascenso de Álvarez impulsa a su partido a ingresar en los primeros lugares, alterando el equilibrio entre las principales fuerzas políticas. A pesar de estas tendencias, el escenario sigue siendo altamente incierto, ya que en el Perú una parte importante del electorado define su voto en la última semana. Así, tanto la elección presidencial como la composición del nuevo Senado permanecen abiertas, con un margen considerable para cambios de última hora.

🌐 ENCUESTA IPSOS: López Aliaga y Fujimori lideran y Grozo asoma en primer simulacro de votaci...

Perú: A pocos días de las elecciones generales del 12 de abril, el país enfrenta no solo su ya conocida inestabilidad política, sino un deterioro democrático progresivo que despierta creciente preocupación internacional. El antecedente de 2021 —cuando se intentó anular sin

pruebas el resultado electoral— evidenció la fortaleza de las instituciones en ese momento, pero cinco años después estas se encuentran debilitadas. El Congreso ha impulsado reformas que erosionan la independencia de tribunales, fiscalía y organismos clave, en un contexto donde varios legisladores enfrentan investigaciones por corrupción. La designación poco transparente de magistrados del Tribunal Constitucional y de un defensor del pueblo sin experiencia en derechos humanos ha contribuido a un giro institucional que favorece al poder legislativo. Como resultado, órganos históricamente encargados de proteger la legalidad y los derechos han perdido autonomía y credibilidad. Este debilitamiento institucional ha tenido consecuencias concretas en el Estado de derecho y la seguridad. La Junta Nacional de Justicia ha investigado a jueces incómodos para el Congreso y destituido fiscales que llevaban casos de corrupción, mientras se dismantelan equipos especializados. Paralelamente, se ha restringido el accionar de la sociedad civil y la prensa mediante normas que permiten sanciones arbitrarias, afectando el control democrático. En este contexto, el avance del crimen organizado —reflejado en el aumento de extorsiones y homicidios— se vincula directamente con la fragilidad institucional. Frente a este escenario, la observación internacional de actores como la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter se vuelve crucial para garantizar elecciones libres y creíbles. El respaldo sostenido de la comunidad internacional será determinante para evitar interferencias y asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones democráticas. 🌐 Las elecciones en Perú requieren atención internacional | Tribuna

Colombia: El candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció ante instancias internacionales un presunto “perfilamiento político” y posibles interceptaciones ilegales en su contra, en el marco de la campaña electoral. El aspirante envió cartas al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y al Parlamento Europeo, en las que expone supuestas irregularidades y solicita acompañamiento internacional al proceso electoral colombiano. En sus comunicaciones, también cuestionó el presunto incumplimiento de compromisos por parte del presidente Gustavo Petro, al tiempo que alertó sobre la posible vulneración de sus comunicaciones privadas, señalando que información atribuida a él habría sido obtenida de manera ilegal y posteriormente difundida. El candidato sostuvo además que enfrenta una campaña sistemática de desprestigio, impulsada —según sus declaraciones— a través de periodistas e influenciadores digitales, lo que considera parte de una estrategia para afectar su imagen pública. En este contexto, solicitó a la comunidad internacional no solo monitorear el desarrollo de las elecciones, sino también garantizar condiciones de seguridad para los candidatos de oposición y sus familias. La denuncia se produce en medio de crecientes tensiones políticas y se suma al debate sobre las garantías electorales en Colombia de cara a los comicios de 2026, en un escenario marcado por cuestionamientos sobre el uso de herramientas digitales, la seguridad y la transparencia del proceso electoral.

🌐 “Perfilamiento político” y “interceptación ilegal”: De la Espriella acude a EE. UU. y Europa por den...

Colombia: La campaña presidencial ha dado un giro inesperado tras las acusaciones del presidente Gustavo Petro contra el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, a quien vinculó con una supuesta trama de fraude electoral basada en interceptaciones de inteligencia. Según el mandatario, existirían conversaciones en las que el abogado habría ofrecido beneficios contractuales a cambio de mecanismos que garantizaran su triunfo electoral, acusaciones que no han sido respaldadas por organismos independientes. Lejos de debilitarlo, la denuncia ha revitalizado la campaña de De la Espriella, quien se ha presentado como víctima de persecución

política y de “chuzadas ilegales”, desafiando públicamente al presidente a mostrar pruebas. Este episodio ocurre en un contexto donde el sistema de inteligencia del Gobierno enfrenta cuestionamientos, incluyendo la destitución de un alto funcionario cercano a Petro por un escándalo relacionado con información falsa y presuntos vínculos con redes criminales. La polémica ha tenido además efectos políticos más amplios al reconfigurar la competencia electoral. El enfrentamiento con Petro ha permitido a De la Espriella repositionarse frente a la candidata del uribismo, Paloma Valencia, e incluso acercarse nuevamente a ese sector, con el respaldo de figuras como Álvaro Uribe. Sin embargo, distintos actores interpretan que las acusaciones del presidente podrían responder a un cálculo estratégico para favorecer al candidato oficialista, Iván Cepeda, al posicionarse como rival en segunda vuelta a un contendiente más débil frente al electorado de centro. Analistas y dirigentes coinciden en que el ruido mediático beneficia tanto al candidato ultra como al oficialismo, en un escenario donde la disputa interna en la derecha y la fragmentación del voto resultan determinantes. Así, una controversia originada desde el poder ha terminado reconfigurando el tablero electoral y devolviendo protagonismo a un candidato que parecía rezagado.

🌐 Abelardo de La Espriella revive su campaña al acusar a Petro de interceptaciones ilegales

Colombia: La candidata presidencial Paloma Valencia exigió explicaciones al presidente Gustavo Petro tras sus declaraciones sobre supuestos informes de inteligencia que involucrarían al candidato Abelardo de la Espriella. A través de una carta pública, Valencia expresó preocupación por un posible uso indebido de información sensible y advirtió sobre el riesgo de que se estén realizando interceptaciones sin claridad legal en medio del proceso electoral. En el documento, planteó interrogantes sobre la existencia de órdenes judiciales, las entidades involucradas y el alcance de estas actividades, subrayando la necesidad de garantías democráticas. La controversia surge luego de que Petro insinuara la existencia de conversaciones entre empresarios y De la Espriella relacionadas con supuestos beneficios electorales, lo que desató una fuerte reacción del candidato, quien negó los señalamientos y retó al mandatario a presentar pruebas. El episodio ha escalado con pronunciamientos de distintos actores políticos que alertan sobre posibles riesgos para la transparencia electoral y la institucionalidad. En este contexto, De la Espriella agradeció el respaldo de Valencia y enmarcó la situación como una amenaza más amplia contra la democracia, llamando a la unidad de sectores opositores frente al oficialismo.

🌐 Paloma Valencia le pide explicaciones al presidente Petro por posibles interceptaciones: “Colom...”

Colombia: La polémica política escaló luego de que el presidente Gustavo Petro insinuara, sin presentar pruebas, la existencia de informes de inteligencia sobre supuestas conversaciones entre Abelardo de la Espriella y los principales accionistas de Thomas Greg & Sons, en el contexto de la controversia por el contrato de los pasaportes. Sus declaraciones desataron una ola de cuestionamientos, ya que varios sectores interpretaron que podría estar reconociendo interceptaciones contra un candidato presidencial de oposición. La reacción fue inmediata: De la Espriella negó cualquier vínculo con los empresarios mencionados, retó al mandatario a mostrar las supuestas grabaciones y respondió con duras acusaciones contra Petro. El episodio provocó además fuertes críticas de dirigentes políticos y miembros de la oposición, quienes lo calificaron como un hecho gravísimo por el potencial impacto sobre las garantías democráticas y la transparencia electoral. Paloma Valencia envió una carta abierta al presidente cuestionando el uso de información sensible y preguntando si existen interceptaciones, si cuentan con orden judicial y qué entidades estarían involucradas. También se sumaron voces como Mauricio Gómez Amín, Katherine Miranda y

Mauricio Cárdenas, quienes advirtieron sobre el peligro de que desde el poder se utilicen mecanismos de inteligencia en medio de la campaña presidencial, elevando aún más la tensión política en Colombia.

🌐 Los vacíos del gobierno Petro al hablar de las posibles escuchas e interceptaciones al candidato ...

Colombia: La candidatura presidencial de Paloma Valencia ha reconfigurado el escenario electoral al consolidarse como una competidora cada vez más fuerte frente a Iván Cepeda, quien durante meses lideró cómodamente las encuestas. Su triunfo en las consultas de la derecha desplazó el eje de la campaña hacia posiciones más moderadas, obligando al candidato de izquierda a replantear su estrategia ante una rival con mayor capacidad de expansión política. Mientras Cepeda mantiene un discurso y estilo constantes, algunos sectores cercanos al Gobierno consideran que no ha logrado adaptarse al nuevo contexto ni ampliar su base más allá de sus votantes convencidos. Valencia, en cambio, ha construido una coalición amplia que incluye apoyos de centroderecha y derecha, sumando figuras con perfil moderado y proyectando una imagen más transversal en un electorado volátil y poco identificado con partidos tradicionales. Aunque Cepeda conserva un piso sólido de apoyo, su ventaja se ha reducido frente al crecimiento de sus rivales, y su estrategia centrada en confrontar al uribismo y defender el legado del Gobierno enfrenta dudas sobre su capacidad de conquistar al electorado indeciso. En este contexto, la campaña entra en una fase más competitiva e incierta, donde la posibilidad de una segunda vuelta abierta comienza a ganar fuerza. 🌐 Paloma gana terreno y obliga a Cepeda a replantear su campaña presidencial

Brasil: Crece el nerviosismo en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ante el desgaste de su gestión y el avance de Flávio Bolsonaro, que ya aparece por delante en algunos sondeos de una eventual segunda vuelta. Lo que hasta hace pocas semanas se consideraba una anomalía estadística comienza a ser leído en el oficialismo como una tendencia preocupante, en un contexto de tensiones internas, reproches en el gabinete y creciente percepción de que el Palacio del Planalto ha perdido capacidad de iniciativa política. Analistas consultados en la nota sostienen que el gobierno ha dejado de ser proactivo y se ha convertido en un actor reactivo frente a una convergencia de factores negativos, entre ellos el cansancio de la figura presidencial, la debilidad comunicacional y la falta de logros capaces de reordenar la agenda pública. Frente a este escenario, Lula busca contener el deterioro con un paquete de alivio económico centrado en el endeudamiento de los hogares, una ofensiva publicitaria para destacar medidas sociales y una apuesta más firme por el discurso de seguridad, terreno tradicionalmente dominado por la derecha. Sin embargo, persisten dudas sobre la eficacia de esa estrategia, tanto por el riesgo fiscal asociado como por la percepción de que el malestar social, la inseguridad y el escándalo del Banco Master erosionan la base de apoyo del oficialismo. La sensación en Brasilia es que el lulismo enfrenta una prueba decisiva: demostrar que todavía conserva la fuerza política, simbólica y electoral suficiente para convencer a un país cada vez más dispuesto a explorar una alternativa de cambio.

🌐 Clima de nervios en el gobierno brasileño ante el desgaste de Lula y el ascenso de Flavio Bolson...

Brasil: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva encara la recta previa electoral difundiendo los logros de su gestión y apostando por la continuidad de su alianza con sectores de centroderecha, en un intento de asegurar gobernabilidad futura. Sin embargo, su administración enfrenta un deterioro en la evaluación pública, con niveles de desaprobación que alcanzan el 40%, en un contexto marcado por señales de enfriamiento económico y un repunte del desempleo. A sus 80

años, Lula busca reforzar su base política manteniendo como vicepresidente a Geraldo Alckmin y promoviendo candidaturas legislativas de figuras de su gabinete para garantizar apoyo parlamentario en caso de victoria. Esta estrategia apunta a consolidar una mayoría legislativa que le permita sostener su agenda de gobierno en un escenario político fragmentado. Enfrente, Flávio Bolsonaro intenta reposicionar al bolsonarismo con una estrategia de moderación orientada a captar el voto de centro, sin abandonar un discurso firme en seguridad, gasto público e impuestos. Pese a la prisión de Jair Bolsonaro, los sondeos muestran que el movimiento conserva fuerza como fenómeno político estructural, aunque atraviesa un proceso de reorganización interna. El escenario sigue altamente polarizado, con escaso margen para otros candidatos, mientras el calendario electoral avanza hacia la formalización de candidaturas en julio-agosto y unos comicios generales previstos para el 4 de octubre. En este contexto, la disputa por el electorado moderado será clave para definir el rumbo de la elección, en una contienda donde la polarización convive con intentos de reposicionamiento estratégico. [🌐 Brazil's Lula and Flavio Bolsonaro in technical tie in run-off simulation, poll shows](#)

Brasil: El país se encamina hacia las elecciones presidenciales del 4 de octubre de 2026 en un clima de fuerte polarización política, con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscando la reelección y Flávio Bolsonaro consolidado como principal adversario tras la inhabilitación y posterior condena de Jair Bolsonaro. Aunque las condenas por el intento de golpe del 8 de enero de 2023 marcaron un precedente inédito contra la impunidad, el país sigue atravesado por tensiones entre los poderes del Estado, una creciente judicialización de la política y una relación compleja entre el Ejecutivo y un Congreso cada vez más fragmentado y dominado por el pragmatismo del centrão. A ello se suma un contexto internacional adverso, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, sanciones y presiones sobre Brasil por el juicio contra Bolsonaro, y una mayor dependencia económica de China, que ha ampliado sus inversiones en sectores estratégicos brasileños. En el frente interno, el panorama combina avances sociales con fuertes incertidumbres económicas y políticas. El Gobierno exhibe una reducción importante de la pobreza, la salida de Brasil del Mapa del Hambre, la ampliación de programas sociales y mejoras en empleo e ingresos, pero esos logros no se traducen plenamente en una sensación extendida de bienestar. La economía se desaceleró en 2025, la deuda pública y las tasas de interés siguen altas, el endeudamiento de los hogares se ha agravado y el auge de las apuestas en línea refleja un malestar social más profundo. En paralelo, la seguridad pública, la salud y el control del gasto continúan como puntos débiles del oficialismo. Aunque los militares aparecen por ahora contenidos, persiste una preocupante politización en los cuarteles, lo que mantiene abierto un foco de tensión institucional. Con este trasfondo, Brasil entra en la campaña de 2026 con una disputa muy cerrada, en la que el resultado dependerá menos de los grandes discursos abstractos y más de quién logre convencer al electorado de que puede ofrecer una mejora concreta en su vida cotidiana. [🌐 Brasil bajo la polarización: balance y perspectivas | Nueva Sociedad](#)

Haití: El Consejo Electoral Provisional (CEP) aplazó el registro de votantes y candidatos para las elecciones de 2026, profundizando la incertidumbre en un país que lleva más de una década sin comicios nacionales. La decisión responde a la necesidad de armonizar el marco electoral con un nuevo decreto que vincula el proceso a un pacto político nacional y a un eventual referéndum constitucional impulsado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé. Esta reconfiguración introduce cambios sustantivos en el calendario y en las reglas del proceso, obligando al CEP a suspender etapas clave sin anunciar nuevas fechas. Aunque se había avanzado en la habilitación de casi 300 partidos y coaliciones, el cronograma electoral queda ahora en suspenso, en medio de

crecientes tensiones institucionales y dudas sobre la viabilidad del proceso. El retraso se suma a problemas estructurales persistentes, como la falta de financiamiento, la inseguridad generalizada y las disputas políticas entre el gobierno y el órgano electoral, lo que agrava el riesgo de una nueva postergación de las elecciones. Fuentes señalan presiones del Ejecutivo para revisar el calendario e incluso aplazar los comicios hasta el próximo año, mientras el CEP advierte que no es posible avanzar sin garantías mínimas de seguridad en territorios controlados por bandas armadas ni sin un presupuesto definido. En este contexto, la reintroducción del referéndum constitucional y la incertidumbre sobre las condiciones básicas para votar consolidan un escenario de transición prolongada, sin horizonte claro de normalización democrática. 🌐 The Haitian Times

Radat Económico-Social



América Latina: El Banco Mundial advirtió que América Latina y el Caribe crecerán apenas un 2,1% en 2026, consolidándose como una de las regiones de menor dinamismo global en un contexto de alta incertidumbre internacional. El informe señala que factores como el elevado costo del financiamiento, la débil demanda externa, las presiones inflacionarias y la baja inversión privada están frenando la creación de empleo y la expansión económica. A pesar de condiciones relativamente favorables como precios aún altos de materias primas y cierta relajación monetaria, la región no logra acelerar su crecimiento debido a debilidades estructurales persistentes, altos niveles de deuda y limitaciones fiscales que restringen la inversión pública. El organismo identifica un desempeño desigual entre países: Argentina destaca como excepción al alza gracias a reformas económicas recientes, mientras Brasil y México enfrentan un crecimiento más débil. En contraste, algunas economías de Centroamérica mantienen mayor dinamismo apoyadas en remesas y exportaciones, y el Caribe muestra divergencias impulsadas por el petróleo en países como Guyana. El Banco Mundial subraya que la región tiene potencial para mejorar si impulsa reformas estructurales, fortalece la inversión privada y aprovecha mejor sus recursos naturales —como el litio y el cobre—, advirtiendo que sin avances en productividad, educación e instituciones, el crecimiento seguirá siendo insuficiente para cerrar brechas y generar desarrollo sostenible.

🌐 El Banco Mundial advierte del lento crecimiento de América Latina y el Caribe este año por el au...

Ecuador-Colombia: La relación bilateral entró en una nueva fase de escalada tras la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de elevar al 100% los aranceles a las importaciones colombianas a partir del 1 de mayo, profundizando una guerra comercial que ya venía intensificándose en los últimos meses. La medida, justificada por Quito en términos de seguridad nacional y lucha contra el narcotráfico, responde —según el Ejecutivo ecuatoriano— a la supuesta falta de acciones efectivas por parte de Colombia en el control de la frontera. Noboa defendió la decisión señalando una reducción del 33% en las muertes violentas en la zona tras medidas previas, mientras Gustavo Petro reaccionó con dureza, calificando el aumento arancelario como una “monstruosidad” y sugiriendo incluso la salida de Colombia del Pacto Andino. La escalada comercial se entrelaza con una creciente crisis diplomática, agravada por el cruce de acusaciones entre ambos mandatarios en torno al narcotráfico y al caso del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien

Petro calificó como “preso político”. Estas declaraciones provocaron una nota de protesta de Quito, el llamado a consultas de su embajador en Bogotá y la suspensión de las mesas técnicas bilaterales destinadas a resolver conflictos en comercio, energía y seguridad. En este contexto, la disputa — iniciada con aranceles del 30% en enero y luego del 50%— alcanza ahora un punto crítico que dificulta cualquier salida negociada en el corto plazo, consolidando un escenario de alta tensión política y económica entre ambos países.

🌐 Ecuador sube al 100% los aranceles a Colombia y profundiza la guerra comercial

Colombia: La Corte Constitucional declaró inconstitucional la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro a finales de 2025, asestando un duro revés a la estrategia del Ejecutivo para enfrentar el déficit fiscal tras el rechazo legislativo a su reforma tributaria. Con una votación de seis a dos, el tribunal concluyó que el Gobierno desbordó los límites del Estado de Derecho al intentar utilizar poderes excepcionales para resolver problemas estructurales, cuestionando incluso que el decreto buscara eludir el control oportuno de la propia Corte. La decisión frustra el objetivo de recaudar 16,3 billones de pesos y deja en suspenso el destino de unos 814.000 millones ya recaudados durante la breve vigencia de la medida, cuya eventual devolución plantea complejos desafíos técnicos y jurídicos. El fallo abre un nuevo frente político e institucional para el Gobierno, que ya anunció la presentación de una nueva reforma tributaria y no descarta recurrir nuevamente a mecanismos de excepción si el Congreso la bloquea. Petro reaccionó con dureza, acusando a la Corte de desfinanciar políticas clave, como la reparación a víctimas, y advirtiendo sobre posibles recortes presupuestarios en otros rubros. Mientras expertos constitucionales respaldan la decisión judicial como una defensa del equilibrio de poderes, el episodio evidencia una creciente tensión entre Ejecutivo y Corte, así como el riesgo de mayor incertidumbre fiscal en un contexto donde las herramientas de política económica del Gobierno enfrentan límites institucionales y políticos cada vez más estrechos.

🌐 La Corte Constitucional declara inconstitucional la emergencia económica decretada por el Gobi...

Venezuela: La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un aumento del salario mínimo —el primero en lo que va de la década— que se aplicará el 1 de mayo, aunque sin precisar su monto, calificándolo de “responsable”. La medida busca contener el creciente malestar social ante la falta de mejoras económicas tangibles, pese a las expectativas generadas tras la intervención estadounidense de enero. En este contexto, y en vísperas de una movilización en Caracas por reivindicaciones económicas, Rodríguez reafirmó el compromiso de su administración con el legado de justicia social de Hugo Chávez. Asimismo, por primera vez reconoció la responsabilidad del Gobierno en la crisis de hiperinflación, desabastecimiento y emigración masiva — que ha expulsado a cerca de ocho millones de venezolanos—, aunque atribuyó el colapso principalmente al “bloqueo económico” y admitió errores en la política salarial que generaron distorsiones fiscales y monetarias. En paralelo, la mandataria anunció una serie de iniciativas institucionales y económicas, entre ellas la creación de una Comisión Presidencial para el Diálogo Laboral con miras a un eventual proceso constituyente sindical, retomando una idea planteada previamente por Nicolás Maduro. También informó sobre la firma de una ley para simplificar trámites administrativos, orientada a mejorar la eficiencia de la burocracia estatal, y propuso un nuevo modelo tributario junto con una comisión para definir los activos estratégicos del Estado. Rodríguez rechazó las propuestas de privatización de PDVSA impulsadas por la oposición y defendió un enfoque estatista. En su discurso, destacó señales de recuperación económica, como la reactivación de la

industria privada y la implementación de subsidios directos a servicios públicos, presentados como “ingresos sociales no monetarios”, con el objetivo de recomponer el nivel de vida y reparar las “heridas sociales” acumuladas en los últimos años.

🌐 Delcy Rodríguez anuncia un aumento “responsable” del salario mínimo para el 1 de mayo en Ven...

México: La inflación se ha convertido en el nuevo frente económico para el Gobierno de Claudia Sheinbaum, al escalar en marzo a 4,59% anual —su nivel más alto desde octubre de 2024— y acumular tres meses consecutivos de alza, impulsada principalmente por el encarecimiento de alimentos básicos como jitomate, pepino y limón, así como por el aumento del transporte aéreo. Este repunte ha situado la inflación nuevamente fuera del rango objetivo del Banco de México y refleja tanto presiones internas como externas, especialmente el impacto del conflicto entre Estados Unidos e Irán sobre los precios de los combustibles. Ante este escenario, el Ejecutivo ha recurrido a subsidios a las gasolinas como mecanismo de contención, intentando amortiguar el traslado de los mayores costos energéticos al consumidor final. Sin embargo, los expertos advierten que esta estrategia tiene límites y que la inflación no es coyuntural, sino el resultado de desequilibrios acumulados y de una política monetaria con eficacia limitada. Mientras el Banco de México ha reducido la tasa de interés pese a riesgos inflacionarios persistentes, el Gobierno ha reforzado los subsidios —particularmente al diésel— y ha negociado con gasolineros para fijar techos de precios, buscando evitar mayores impactos en el costo de vida. Aun así, las perspectivas siguen siendo inciertas: la guerra en Medio Oriente podría intensificar las presiones inflacionarias en los próximos meses, mientras que el margen fiscal para sostener subsidios es acotado. En este contexto, la inflación emerge como un desafío estructural clave que condicionará el desempeño económico y político del nuevo gobierno.

🌐 La escalada de precios en México, el nuevo frente económico de Sheinbaum

México: La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la apertura de su Gobierno al fracking para la extracción de gas, marcando un giro significativo respecto a su histórica oposición a esta técnica. La decisión, orientada a reducir la dependencia energética de Estados Unidos, fue precedida por meses de señales graduales y discursos ambiguos que prepararon el terreno político. El cambio resulta especialmente paradójico dada su trayectoria académica vinculada al cambio climático y su promesa de campaña de mantener la prohibición instaurada por su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ya desde el Congreso, el oficialismo había evitado blindar constitucionalmente esa prohibición, dejando abierta la puerta a este giro pragmático. El Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex) 2025-2035 y la asignación de recursos para explorar yacimientos complejos confirmaban que la transición hacia el fracking estaba en marcha desde hace meses. El Gobierno sostiene que la técnica ha evolucionado y puede aplicarse de forma más sustentable, utilizando agua no potable, químicos menos agresivos y mecanismos de reutilización, en línea con la idea de un gas natural como energía de transición. Sin embargo, organizaciones como la Alianza Mexicana Contra el Fracking cuestionan la viabilidad de un “fracking sustentable” y advierten sobre sus riesgos ambientales, especialmente en regiones con estrés hídrico donde se concentran los mayores yacimientos. Además, critican que esta estrategia perpetúa la dependencia de los combustibles fósiles en detrimento de las energías renovables. Con reservas estimadas en 141 billones de pies cúbicos y planes de explotación a partir de 2027, el proyecto requiere fuertes inversiones y esquemas público-privados, lo que añade presión fiscal y política sobre el Gobierno. Así, Sheinbaum asume el costo de una apuesta que tensiona su identidad ambientalista y la coloca en

contradicción con sectores progresistas y parte de su propia base política.

🌐 La lenta y sutil entrada definitiva de México al 'fracking'

México: La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una estrategia de inversión mixta en infraestructura como eje central para reactivar el crecimiento económico, a través de una iniciativa de ley que busca fomentar la colaboración entre el Estado y el sector privado en áreas clave como energía, transporte ferroviario, carreteras y puertos. El plan, ya aprobado en Diputados y pendiente en el Senado, apunta a movilizar hasta 5,6 billones de pesos entre 2026 y 2030 sin recurrir a aumentos de impuestos ni comprometer las finanzas públicas. Esta apuesta surge en un contexto de bajo crecimiento —0,8% en 2025— y busca restablecer la confianza del sector empresarial tras años de tensiones durante el gobierno anterior. Además, el Gobierno ha delineado una distribución sectorial de la inversión con fuerte énfasis en energía, lo que refleja la prioridad estratégica de este rubro en la agenda económica. El modelo propone que el Estado actúe como socio en proyectos estratégicos, combinando inversión pública y privada para ampliar la capacidad productiva y mejorar la conectividad. Sin embargo, persisten dudas sobre la certeza jurídica y los márgenes de discrecionalidad en la definición de proyectos y reglas operativas, lo que genera cautela entre analistas y empresarios. Aun así, el Gobierno proyecta un repunte del crecimiento en los próximos años, apoyado en esta estrategia de inversión como motor principal, mientras organismos y actores económicos insisten en la necesidad de mayor claridad regulatoria para consolidar el impulso. En paralelo, el sector privado ha manifestado interés en participar activamente, aunque exige mayor certidumbre en la toma de decisiones y en las condiciones contractuales.

🌐 Sheinbaum apuesta por la inversión mixta en infraestructura para empujar el crecimiento

Panamá: La disputa por el control de los puertos estratégicos del Canal de Panamá ha escalado a un nuevo nivel tras el inicio de un arbitraje internacional por parte de Panama Ports Company (PPC) contra la danesa Maersk. PPC, filial del grupo hongkonés CK Hutchison, acusa a Maersk de incumplir acuerdos comerciales y de alinearse con el Gobierno panameño en un proceso que considera una "toma ilegal" de las terminales de Balboa y Cristóbal, cuya concesión fue anulada por la Corte Suprema. La empresa sostiene que esta decisión le ha generado pérdidas superiores a 2.000 millones de dólares y ha abierto un doble frente legal, tanto contra el Estado panameño como contra su nuevo competidor. Por su parte, Maersk rechaza las acusaciones y afirma que defenderá su posición en el arbitraje, mientras opera de forma transitoria las terminales para garantizar la continuidad del comercio. El conflicto empresarial se inserta en un contexto geopolítico más amplio, marcado por las tensiones entre Estados Unidos y China por la influencia en el Canal de Panamá, una infraestructura clave por la que pasa cerca del 40% del tráfico de contenedores estadounidense. El Gobierno panameño, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, defiende que ha actuado conforme a la legalidad tras el fallo judicial, mientras denuncia presiones y represalias por parte de China, como el aumento de inspecciones a buques con bandera panameña. En paralelo, Washington ha intensificado sus críticas a la presencia china en la región, y el presidente Donald Trump ha vuelto a cuestionar esa influencia. Así, la disputa por los puertos panameños trasciende lo comercial y se convierte en un nuevo episodio de la competencia estratégica entre grandes potencias en un punto neurálgico del comercio global.

🌐 Crece la tensión por los puertos de Panamá: ahora se enfrentan dos empresas | CNN

Panamá: Un informe elaborado por UNICEF, el Banco Mundial y el Ministerio de Desarrollo Social revela que el 34,5% de los niños, niñas y adolescentes vive en situación de pobreza en el país, mientras que el 16% se encuentra en pobreza extrema, lo que equivale a más de 482.000 menores afectados. Estas cifras superan ampliamente los niveles de pobreza en la población general, evidenciando una mayor vulnerabilidad de la niñez y una brecha persistente que el crecimiento económico no ha logrado corregir. El informe advierte que esta situación impacta directamente en el acceso a alimentación, educación y condiciones básicas de desarrollo, perpetuando un ciclo de desigualdad desde las primeras etapas de la vida. La pobreza infantil presenta además una fuerte dimensión territorial, concentrándose en zonas rurales y comarcas indígenas, donde alcanza niveles críticos: más del 80% de los menores vive en pobreza y en algunos casos supera el 90%, como en Ngäbe Buglé. El estudio también identifica a la primera infancia como el grupo más afectado y destaca que factores como hogares numerosos o monoparentales incrementan el riesgo de pobreza. Pese a avances previos, la pandemia interrumpió la reducción de estos indicadores y la recuperación ha sido más lenta para la niñez. Los organismos internacionales alertan que esta situación no solo constituye una deuda social, sino que compromete la productividad futura y el crecimiento económico del país, por lo que recomiendan fortalecer políticas focalizadas, mejorar las transferencias sociales y ampliar los servicios de desarrollo infantil temprano.

🌐 Más del 30% de los niños en Panamá vive en pobreza y la cifra supera el 80% en zonas indígenas

Argentina: El presidente Javier Milei reconoció por primera vez las dificultades económicas que atraviesa el país al admitir que “estos últimos meses fueron duros” y pedir “paciencia” a la población, en un contexto de creciente malestar social reflejado en las encuestas y en el deterioro de su imagen pública. El mandatario, sin embargo, ratificó el rumbo de su programa económico y sostuvo que la situación actual es el costo necesario de los ajustes implementados. Este reconocimiento coincide con datos oficiales que evidencian un deterioro de la actividad, como la caída interanual del 8,7% en la producción industrial, con desplomes superiores al 20% en sectores clave como maquinaria, automotores y textiles, además de retrocesos en la construcción, lo que impacta directamente en el empleo y la dinámica económica. Pese a este escenario adverso, Milei defendió su gestión, aseguró que la economía “está mucho mejor que en 2023” y atribuyó las dificultades a la herencia recibida, descartando cualquier cambio en su estrategia basada en ajuste fiscal, desregulación y apertura económica. Al mismo tiempo, intensificó sus críticas contra la prensa, a la que acusó de distorsionar la realidad económica. No obstante, los indicadores sociales y económicos reflejan tensiones persistentes: aumento del desempleo hasta el 7,5%, inflación que volvió a acelerarse tras haber sido contenida y niveles de desaprobación que superan el 50% en la mayoría de los sondeos. En este contexto, el llamado a la paciencia busca contener el desgaste político en medio de un escenario económico aún frágil y con resultados desiguales para distintos sectores de la sociedad. 🌐 Milei admite por primera vez problemas económicos y pide “paciencia” a los argentinos

Argentina: El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó ante empresarios e inversores en el Atlantic Council la estrategia del Gobierno para reducir el denominado “costo argentino”, basada en tres ejes centrales: baja de impuestos, desregulación y mejora de la logística. En su exposición, el funcionario descartó de manera enfática la devaluación del peso como herramienta para ganar competitividad, diferenciándose de políticas anteriores que, según sostuvo, recurrían al tipo de cambio para compensar errores estructurales. Caputo insistió en que la actual gestión apunta a resolver problemas de fondo y no a aplicar soluciones transitorias, en un contexto de debate sobre el

nivel del tipo de cambio y señales de pérdida de competitividad en sectores intensivos en empleo. Asimismo, reivindicó el rumbo económico del Gobierno, al afirmar que las reformas en marcha son irreversibles y constituyen el único camino sostenible para mejorar la competitividad. En su intervención, el ministro también repasó la situación heredada, caracterizada por alta inflación, problemas en el abastecimiento de combustibles y debilidades en la seguridad jurídica, que sintetizó con la frase “venimos del infierno”. Entre las prioridades destacó el desarrollo de infraestructura como factor clave para reducir costos logísticos, anunciando la licitación de 9000 kilómetros de corredores viales y el avance en concesiones de otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales, en coordinación con el equipo de Federico Sturzenegger. En paralelo, subrayó el impulso a la reforma laboral —aun con obstáculos judiciales— con el objetivo de aumentar la formalización del empleo y mejorar la recaudación, lo que permitiría avanzar en la reducción de impuestos. También mencionó la reglamentación de la Ley de “Inocencia Fiscal” y la intención de fortalecer el mercado de capitales orientado a la economía real, como parte de una agenda integral de reformas estructurales.

🌐 Caputo ratificó su plan de tres ejes para bajar el “costo argentino” y descartó devaluar

Argentina: La economía argentina enfrenta un nivel récord de morosidad que ya alcanza al 9,3% de los préstamos a familias, el más alto desde la crisis de 2001, en un contexto donde cerca de 20,5 millones de personas —alrededor del 60% de la población adulta— tienen deudas financieras. El fenómeno ha crecido con fuerza en el último año, especialmente en los créditos de menor monto y en entidades no bancarias como billeteras virtuales y casas comerciales, que concentran a los sectores de menores ingresos y presentan niveles de incumplimiento significativamente más altos. Este deterioro refleja una creciente fragilidad financiera de los hogares, que han recurrido al crédito como mecanismo para sostener su consumo ante la caída del poder adquisitivo. El aumento de la morosidad está directamente vinculado al programa económico del Gobierno de Javier Milei, que logró reducir la inflación pero a costa de un fuerte ajuste en los ingresos y una política monetaria restrictiva que elevó las tasas de interés a niveles extremos. Esta combinación generó un “cóctel explosivo”: familias endeudadas en un contexto de ingresos deprimidos y costos financieros crecientes, lo que volvió impagables muchos créditos. En este escenario, el Gobierno enfrenta una disyuntiva compleja entre sostener tasas altas para contener la inflación o flexibilizarlas para aliviar la carga financiera de los hogares. La morosidad, así, deja de ser un fenómeno aislado y pasa a ser una consecuencia estructural del propio modelo económico, cuya resolución sigue siendo incierta. 🌐 Morosidad récord en Argentina, ¿error o característica del programa? | Opinión

Venezuela: Tras 19 trimestres consecutivos de crecimiento moderado, la economía venezolana muestra signos de aceleración, con una expansión estimada cercana al 12% en 2026, impulsada principalmente por el repunte del sector petrolero. La producción ha superado el millón de barriles diarios y las exportaciones, especialmente hacia Estados Unidos, han crecido de forma significativa gracias a acuerdos con empresas internacionales y a un enfoque más pragmático del gobierno interino de Delcy Rodríguez. Este dinamismo ha comenzado a irradiar hacia otros sectores como la construcción, la manufactura y los servicios, generando mayor demanda, empleo e inversión. Asimismo, el aumento de ingresos en divisas ha contribuido a estabilizar parcialmente el mercado cambiario, reduciendo presiones sobre la devaluación y creando un entorno macroeconómico relativamente más favorable tras años de crisis. Sin embargo, esta recuperación sigue siendo frágil y altamente dependiente del petróleo, en un contexto de inflación aún extremadamente elevada y debilidades estructurales persistentes. Aunque se proyecta una

desaceleración inflacionaria, los niveles seguirán entre los más altos del mundo, reflejando la falta de un programa macroeconómico integral. El crecimiento actual responde más al uso de capacidad ociosa que a una transformación productiva, mientras persisten déficits en infraestructura, financiamiento y seguridad jurídica. El futuro económico dependerá, en gran medida, de la capacidad del gobierno para impulsar reformas profundas —como la apertura comercial, la estabilidad institucional y la modernización del marco regulatorio— que permitan atraer inversión sostenida y diversificar la economía. De lo contrario, el país corre el riesgo de repetir ciclos de recuperación temporal ligados a los precios del petróleo, sin lograr un desarrollo estructural duradero.

🌐 Venezuela's Economy Is Accelerating, But Will Depend on More Than Oil

Radars Inseguridad



América Latina: La expansión de organizaciones criminales brasileñas como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) está redefiniendo la arquitectura de seguridad regional, consolidando un modelo de “gobernanza ilícita” con creciente proyección transnacional. Estas estructuras, originadas en el sistema penitenciario brasileño —marcado por el hacinamiento y la debilidad institucional— han evolucionado hacia organizaciones altamente sofisticadas, capaces de controlar rutas logísticas, reclutar desde cárceles y adaptarse a la presión estatal. Mientras el PCC opera con una lógica centralizada y corporativa, expandiéndose incluso hacia sectores legales como el financiero e inmobiliario, el CV adopta un modelo descentralizado tipo franquicia que le otorga flexibilidad en entornos urbanos fragmentados. Su presencia ya alcanza al menos 28 países, donde actúan como actores clave en las cadenas globales del narcotráfico, especialmente a través de corredores estratégicos como la Amazonía. La diversificación de sus actividades —que incluye minería ilegal, extorsión y robo de carga— genera flujos ilícitos estimados en 273.000 millones de dólares anuales, fortaleciendo su capacidad de infiltración en gobiernos locales y su poder territorial. A ello se suma una creciente sofisticación tecnológica, con uso de drones y producción de armamento mediante impresión 3D, lo que evidencia una mutación hacia formas más avanzadas de criminalidad organizada. Frente a este escenario, el texto plantea la urgencia de una reingeniería de las políticas de seguridad, que supere el enfoque exclusivamente represivo y priorice la inteligencia financiera, la reforma penitenciaria y la cooperación regional. La recuperación del control territorial, el fortalecimiento institucional y la trazabilidad de los capitales ilícitos aparecen como pilares esenciales para contener un fenómeno que refleja fallas estructurales del Estado y amenaza con sustituir la soberanía legal por el poder de facto de estas redes criminales. 🌐 Latinoamerica21

México: Juan Carlos Valencia González, conocido como *El Pelón* o *R3*, emerge como uno de los principales candidatos a suceder a Nemesio Oseguera Cervantes al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un proceso que combina poder operativo y herencia familiar dentro del narcotráfico mexicano. Hijo de Armando Valencia Cornelio e hijastro de *El Mencho*, su trayectoria refleja la continuidad de un entramado criminal construido durante décadas por el clan de

los Valencia, con fuertes vínculos tanto en México como en Estados Unidos. Las autoridades de ambos países lo consideran una figura clave dentro de la organización, al punto de ofrecer una recompensa millonaria por su captura, mientras su ascenso lo coloca por primera vez en la primera línea del crimen organizado. Valencia González ha liderado el Grupo Élite del CJNG, una estructura armada altamente equipada y con entrenamiento militar, que simboliza la capacidad de fuego y organización del cartel. A través de esta fuerza, el CJNG consolidó su expansión territorial y su posicionamiento como una de las organizaciones criminales más poderosas del país, con presencia en múltiples estados y conexiones internacionales. En este contexto, su eventual liderazgo no solo responde a criterios estratégicos, sino que confirma el peso determinante de las dinastías familiares en la evolución del narcotráfico mexicano, donde la sucesión se define tanto por la capacidad operativa como por los lazos de sangre.

🌐 La hora criminal de Juan Carlos Valencia González al frente del Cartel Jalisco Nueva Generación

México: Erick Valencia Salazar, cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable en Estados Unidos de un cargo de conspiración para distribuir cocaína destinada a su importación, lo que podría derivar en una condena de entre 10 años y cadena perpetua. Valencia, quien había integrado previamente el Cártel del Milenio, fue una figura clave en la creación del CJNG junto a Rubén Oseguera Cervantes. Tras su ruptura con este último, formó el Cártel Nueva Plaza, una organización que emergió a partir de disputas internas por el liderazgo y control territorial. El 85 fue detenido en México en 2012, liberado en 2017 por fallas procesales y recapturado en 2022. El Cártel Nueva Plaza surgió como una escisión del CJNG y protagonizó enfrentamientos violentos por el control de zonas estratégicas en Jalisco, en medio de una disputa que derivó en episodios de alta violencia, desapariciones y conflictos armados. Aunque el CJNG logró consolidarse como una de las organizaciones criminales más poderosas, informes de inteligencia indican que Nueva Plaza no fue completamente desarticulado, manteniendo estructuras operativas de bajo perfil y presencia local. La evolución de este grupo refleja las dinámicas internas del narcotráfico en México, marcadas por divisiones, reconfiguración de alianzas y persistencia de redes criminales incluso tras golpes judiciales y militares.

🌐 Cártel Nueva Plaza: la organización criminal que creó “El 85” tras romper con “El Mencho”

México: El Ejército mexicano incautó 69 artefactos explosivos caseros en operativos realizados en Badiraguato y Culiacán, en el estado de Sinaloa, los cuales —según autoridades— estaban destinados a ser utilizados por grupos criminales, incluidos dispositivos adaptados para ser lanzados desde drones. En una primera intervención en zonas rurales de Badiraguato, las fuerzas armadas aseguraron 51 explosivos improvisados, además de armas largas, cargadores y casi 1.900 cartuchos. En un segundo operativo en Culiacán, localizaron otros 18 artefactos ocultos entre la vegetación, específicamente acondicionados para su uso aéreo, lo que evidencia una creciente sofisticación en las tácticas del crimen organizado. Estos hallazgos se enmarcan en un contexto de intensificación de la violencia en Sinaloa, donde las disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa han impulsado el uso de tecnología comercial con fines bélicos. Las autoridades señalaron que los explosivos serán destruidos de forma controlada y que no hubo detenidos durante los operativos, mientras destacaron que este tipo de decomisos busca reducir la capacidad operativa de los grupos armados. El uso de drones para ataques con explosivos —ya documentado en episodios recientes— refleja una evolución preocupante en los métodos del crimen

organizado, obligando a reforzar las estrategias de seguridad en la región.

🌐 Ejército incauta 69 explosivos caseros en Sinaloa: criminales planeaban lanzarlos desde drones

Colombia: Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, continúa evadiendo a las autoridades pese a una ofensiva militar sostenida que incluye bombardeos, inteligencia y despliegue de tropas en el sur del país. Aunque recientemente se llegó a creer que había muerto tras una operación en Vaupés que golpeó a su anillo de seguridad, las autoridades confirmaron que su cuerpo no estaba entre los abatidos, y su paradero volvió a convertirse en un enigma. Su figura sigue siendo central en la agenda de seguridad del Gobierno de Gustavo Petro, que ha intensificado los operativos en su contra en los últimos meses. A pesar de los múltiples golpes a su entorno cercano —incluidas capturas de familiares y bajas en su estructura—, Mordisco ha logrado escapar sistemáticamente, acumulando al menos quince reportes erróneos de su muerte en los últimos ocho años. Las autoridades han optado por debilitar su círculo personal como estrategia para forzarlo a cometer errores, pero hasta ahora solo han encontrado indicios fragmentarios que no han permitido concretar su captura. Su persistente evasión, sumada a sus presuntos vínculos con redes internacionales del narcotráfico, lo mantiene como uno de los objetivos más esquivos del Estado colombiano, en una persecución que sigue abierta y sin resultados definitivos. 🌐 El rastro esquivo de Iván Mordisco

Venezuela: Familiares de presos políticos reclusos en la cárcel El Rodeo I anunciaron que intensificarán sus protestas tras denunciar una fuerte represión ocurrida durante una manifestación de los detenidos esta semana. Los allegados, que llevan más de 90 días realizando vigiliadas permanentes en las afueras del penal, exigen la excarcelación y garantías de integridad para los internos, luego de que varios resultaran heridos por el uso de gas lacrimógeno, gas pimienta y golpes por parte de custodios. Según testimonios, la protesta se inició cuando algunos reclusos se negaron a regresar a sus celdas en rechazo a las condiciones de detención, lo que derivó en un operativo represivo que dejó a varios presos en estado delicado. Las denuncias también apuntan a condiciones carcelarias precarias, con encierros de hasta 23 horas diarias, falta de acceso a comunicación —especialmente para detenidos extranjeros— y problemas de salud generalizados entre los internos. Mientras los familiares reiteran que mantendrán sus protestas hasta lograr la liberación de los detenidos, el Ministerio Público sostuvo que se cumplieron los protocolos y el uso adecuado de la fuerza tras una inspección oficial. El episodio profundiza las tensiones en torno a la situación de los presos políticos en Venezuela, en un contexto de crecientes cuestionamientos internacionales sobre derechos humanos y condiciones de reclusión.

🌐 Familiares de presos políticos intensificarán sus protestas tras una fuerte represión en la cárcel E...

República Dominicana: El asesinato del mayor de la Policía Nacional Silo Miguel “Popoters” Polanco, ocurrido en el sector Villa Juana durante un asalto, desencadenó una rápida y contundente respuesta del Estado dominicano que culminó con la desarticulación de la banda criminal “El Circuito del Bloque”. El ataque, captado por cámaras de seguridad, evidenció un accionar coordinado y violento que transformó un hecho de delincuencia común en un desafío directo a las instituciones. En cuestión de horas, las autoridades desplegaron operativos a gran escala liderados por unidades de inteligencia y fuerzas tácticas, con el objetivo de capturar a todos los responsables. La ofensiva policial dejó en claro un mensaje inequívoco: los ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad no quedarían impunes y serían enfrentados con toda la capacidad del

Estado. El operativo tuvo su punto culminante con la muerte del presunto cabecilla de la banda, Yeison Nivar Pérez, alias “Mandrake”, quien fue abatido tras enfrentarse con agentes en el Ensanche Luperón. Su caída desarticuló la estructura criminal y provocó un efecto inmediato en el resto de los implicados, varios de los cuales optaron por entregarse voluntariamente, buscando garantías para su integridad física. Otros ya se encuentran detenidos y algunos permanecen prófugos, mientras el caso avanza hacia instancias judiciales. Más allá del desenlace policial, el episodio refuerza la narrativa de un Estado que responde con firmeza ante el crimen organizado, dejando en evidencia que la violencia contra la autoridad tiene consecuencias severas y que, en última instancia, nadie está por encima de la ley.

🌐 Ejecución, plomo y rendición en República Dominicana: La caída de los sicarios que mataron a u...

Triángulo Norte: Las detenciones de migrantes provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala registraron una caída inédita del 84% en los primeros meses de 2026, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Entre enero y febrero se contabilizaron apenas 3.909 aprehensiones —2.424 en Estados Unidos y 1.485 en México— frente a más de 24.000 en el mismo periodo de 2025, consolidando un descenso abrupto en uno de los flujos migratorios más persistentes de la región. La mayoría de los casos corresponde a ciudadanos guatemaltecos, seguidos por hondureños y salvadoreños, con reducciones significativas en todos los países y en ambos lados de la frontera. Este desplome se inscribe en una tendencia descendente iniciada tras los picos históricos de 2023 y 2024, pero marca la contracción más pronunciada de la década. Aunque la OIM no identifica causas específicas, el fenómeno podría estar vinculado a cambios en políticas migratorias, mayores controles, acuerdos bilaterales o condiciones económicas en los países de origen y destino. El dato introduce interrogantes sobre el futuro de la migración irregular desde Centroamérica, en un contexto donde persisten las causas estructurales —como la inseguridad y la falta de oportunidades— que históricamente han impulsado estos desplazamientos. Asimismo, la fuerte reducción podría estar reflejando un endurecimiento de los controles fronterizos y una mayor disuasión en las rutas migratorias. También plantea dudas sobre posibles desplazamientos hacia rutas alternativas o una subestimación de flujos no detectados. En cualquier caso, el fenómeno obliga a monitorear si se trata de un cambio estructural o de una caída coyuntural. Su evolución en los próximos meses será clave para entender la dinámica migratoria regional.

🌐 Los arrestos de personas del Triángulo Norte caen 84 por ciento en Estados Unidos y México

Radar América Latina-Estados Unidos



Venezuela-Estados Unidos: Un movimiento judicial en Estados Unidos evidencia una inusual coordinación entre sectores del chavismo y la oposición en la defensa de los activos venezolanos en el exterior, particularmente los vinculados a PDVSA. Abogados que representan al Gobierno encabezado de facto por Delcy Rodríguez y a la oposición asociada a Juan Guaidó solicitaron conjuntamente la suspensión de un proceso en Nueva York por 45 días, con el objetivo de coordinar su defensa frente a acreedores que buscan embargar bienes del país. Esta acción podría fortalecer la posición venezolana en litigios que involucran reclamaciones por más de 21.000 millones

de dólares, en un contexto donde Estados Unidos reconoce a Rodríguez como autoridad legítima para actuar en nombre del Estado. El principal activo en disputa es Citgo, cuya posible venta ha sido autorizada judicialmente pero aún depende de aprobaciones regulatorias. La nueva situación política tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha reconfigurado el escenario legal y económico, incluyendo el restablecimiento de relaciones con Washington y cambios en el control de activos estratégicos. Paralelamente, el país busca atraer inversión mediante nuevas leyes en el sector petrolero y minero, aunque organizaciones internacionales advierten sobre riesgos asociados, como el posible blanqueo de oro ilegal y violaciones de derechos humanos en zonas de extracción.

🌐 La pelea por los activos de Venezuela en Estados Unidos acerca al chavismo con la oposición

Venezuela-Estados Unidos: La creciente presencia de Estados Unidos en Caracas, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas, está reconfigurando el escenario político y económico del país, en un giro impensable durante años de retórica antiestadounidense del chavismo. La reapertura de la embajada, el despliegue de personal diplomático y la llegada de altos funcionarios de Washington marcan una nueva etapa, donde incluso sectores sociales comienzan a asociar la presencia estadounidense con expectativas de cambio. Este nuevo contexto ha sido impulsado tras la captura de Nicolás Maduro y ha permitido una mayor interlocución directa entre el gobierno de Delcy Rodríguez y autoridades estadounidenses. La presencia de funcionarios, empresas y símbolos estadounidenses refleja un cambio profundo en la narrativa política y en las dinámicas de poder dentro del país. En el plano económico, el acercamiento ha generado expectativas de inversión, especialmente en el sector petrolero, donde empresas como Chevron han ampliado su actividad y técnicos estadounidenses han comenzado a operar en el terreno. Sin embargo, persisten dudas sobre la estabilidad política y jurídica necesaria para atraer capitales de gran escala, mientras los beneficios económicos aún no se reflejan de manera significativa en la población. Aunque se han anunciado fondos y mejoras puntuales, como incrementos en bonos sociales, la recuperación sigue siendo incipiente y condicionada al ritmo de la transición política. En este escenario, la relación con Estados Unidos aparece como un factor clave, pero aún incierto, para el futuro de Venezuela, en medio de expectativas que avanzan más rápido que los resultados concretos.

🌐 La creciente presencia de Estados Unidos cambia la política en Venezuela

Venezuela-Estados Unidos: Desde hace tres meses, Delcy Rodríguez se mantiene como presidenta encargada tras una controvertida decisión del Tribunal Supremo que calificó la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos como una “ausencia forzosa”, figura inexistente en la Constitución. Este mecanismo permitió al chavismo sostenerse en el poder con un marco legal cuestionado, evitando activar los plazos constitucionales que obligarían a convocar elecciones. La falta de claridad jurídica ha reabierto el debate sobre la legitimidad del Gobierno, mientras expertos y organizaciones señalan que ya existe una “falta absoluta” que debería derivar en un proceso electoral. Sin embargo, ni el Tribunal Supremo ni las autoridades han avanzado en esa dirección, manteniendo una situación de incertidumbre institucional prolongada. La continuidad de Rodríguez parece depender más del respaldo de Estados Unidos que de la legalidad interna, en un contexto donde Washington la reconoce como autoridad y ha levantado sanciones en su contra. Mientras tanto, crece la presión interna por elecciones, con protestas y demandas por un nuevo órgano electoral, aunque el calendario constitucional parece estar congelado. En paralelo, Rodríguez ha impulsado cambios en el gabinete, liberaciones parciales de presos políticos y una reconfiguración de su liderazgo, buscando proyectarse como figura de transición. No obstante, persisten dudas sobre

si estos movimientos responden a una estrategia autónoma o a directrices externas, en un escenario donde intereses económicos y tensiones sociales elevan la urgencia de una definición política que sigue sin concretarse.

🌐 Delcy Rodríguez, tres meses en la presidencia de Venezuela bajo la mirada de Trump

Cuba-Estados Unidos: Las recientes conversaciones entre ambos países configuran, más que un proceso de transición, un diálogo táctico marcado por una profunda asimetría y la ausencia de un núcleo real de acuerdo. Estados Unidos busca aprovechar la vulnerabilidad estructural de Cuba —agravada por la crisis económica, el aislamiento regional y nuevas presiones como el bloqueo energético impulsado por el presidente Trump— para inducir cambios económicos y políticos de fondo. Sin embargo, la estrategia estadounidense aparece tensionada entre el pragmatismo y el maximalismo, influida por la política interna y por el peso del exilio cubano, cuyos sectores más duros condicionan cualquier avance a reformas democráticas sustantivas. A esto se suma una comunicación errática, donde declaraciones radicales elevan los costos del diálogo y terminan reforzando la narrativa defensiva del régimen. Del lado cubano, el diálogo responde a una lógica de supervivencia autoritaria más que a una apertura genuina. El régimen acepta negociar aspectos técnicos —como seguridad, migración o inversiones— e incluso realizar concesiones limitadas, pero rechaza de plano cualquier reforma estructural que altere su control político. La toma de decisiones permanece concentrada en una élite cívico-militar, lo que refuerza la opacidad y rigidez del sistema. En este contexto, la negociación se configura como un equilibrio inestable entre coerción externa y resistencia interna, con resultados previsiblemente parciales, reversibles y limitados. La paradoja central es que la presión sostenida de Washington, lejos de forzar una transición, podría terminar fortaleciendo la capacidad adaptativa del régimen cubano y consolidando su continuidad política.

Cuba-Estados Unidos: La creciente expectativa de una eventual transición política en la isla ha reactivado las disputas por el liderazgo dentro del exilio cubano en Miami, impulsadas por factores externos como la captura de Nicolás Maduro y las señales de Donald Trump sobre un posible cambio inminente en Cuba. En este contexto, diversas figuras —opositores, empresarios e influencers— buscan posicionarse como protagonistas de un eventual escenario poscastrista, en medio de interrogantes sobre el papel que jugaría Estados Unidos en la definición de ese liderazgo. El debate revive tensiones históricas dentro de la diáspora sobre quién debería encabezar el proceso de transición y bajo qué condiciones políticas. Mientras sectores del exilio impulsan planes detallados de transición, incluyendo estructuras de gobierno provisionales, otros advierten sobre el riesgo de desconexión entre los líderes en el exterior y la realidad dentro de la isla, subrayando que la legitimidad debe surgir del pueblo cubano. A ello se suma la persistencia de una oposición interna que reivindica el protagonismo de la resistencia dentro del país frente a las iniciativas diseñadas desde el extranjero. Analistas, sin embargo, alertan sobre expectativas sobredimensionadas y sobre la posibilidad de que un eventual cambio no responda a las aspiraciones del exilio. En este escenario, el futuro liderazgo de Cuba permanece abierto, condicionado tanto por factores internos como por la influencia externa.

🌐 La expectativa de una transición en Cuba agita las disputas por el liderazgo en el exilio

Brasil-Estados Unidos: El Gobierno anunció un acuerdo de colaboración con Estados Unidos para combatir el crimen organizado mediante el intercambio de información entre

autoridades de ambos países, con foco en el tráfico de drogas y armas. La estrategia prioriza la asfixia financiera de las organizaciones criminales, tomando como referencia operaciones recientes que desmantelaron redes de lavado de dinero del Primeiro Comando da Capital (PCC). El convenio contempla el intercambio de datos en tiempo real, el rastreo de cargas y acciones conjuntas para interceptar envíos ilícitos. Brasil compartirá información sobre armas y drogas incautadas con origen en EE.UU., mientras que Washington aportará datos sobre contenedores con destino al país sudamericano, en un intento por reducir el flujo ilegal de armamento. El acuerdo se da en un contexto político marcado por presiones de sectores bolsonaristas para que Estados Unidos clasifique como terroristas a las principales mafias brasileñas, el PCC y el Comando Vermelho, algo que el Gobierno de Lula busca evitar apostando por la cooperación institucional. La iniciativa también responde a la centralidad de la seguridad pública en la agenda electoral, a siete meses de los comicios presidenciales y parlamentarios. En medio de un escenario donde el discurso de mano dura gana terreno, la izquierda enfrenta dificultades para articular una respuesta eficaz frente al avance del crimen organizado. En paralelo, el presidente Lula ve reducirse su ventaja en las encuestas frente a Flávio Bolsonaro, mientras su equipo intensifica gestiones con Washington para evitar medidas unilaterales de la administración de Donald Trump.

🌐 Brasil anuncia una colaboración con Estados Unidos para combatir el crimen organizado

Honduras-Estados Unidos: El expresidente Juan Orlando Hernández aseguró que la justicia de Estados Unidos ha anulado su condena por narcotráfico, tras una supuesta decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York que ordenaría desestimar su caso. El anuncio se produce apenas cuatro meses después de haber sido indultado por Donald Trump, en un giro que pone fin —según el propio Hernández— a lo que calificó como una persecución política. El exmandatario, condenado en 2024 a 45 años de prisión por facilitar el tráfico de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, celebró la decisión como una reivindicación total de su inocencia. Su caída había sido considerada un símbolo de la lucha contra la impunidad en Centroamérica, tras su extradición en 2022 y un juicio que lo señalaba como pieza clave de una red de narcotráfico vinculada a estructuras estatales. La noticia ha generado fuertes reacciones en Honduras, donde persiste una profunda división sobre su legado. Diversos sectores recuerdan las acusaciones que lo vinculaban con carteles de droga —incluyendo señalamientos de recibir dinero del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán— y denuncian que el indulto y la anulación del caso debilitan la credibilidad de la justicia estadounidense. Además, el futuro judicial de Hernández en su país sigue siendo incierto, ya que la Fiscalía hondureña mantiene una orden de captura en su contra y ha advertido que será detenido si regresa al país. Organizaciones de la sociedad civil y analistas sostienen que, más allá de las decisiones judiciales en Estados Unidos, el exmandatario sigue siendo percibido como un símbolo de corrupción y de la penetración del crimen organizado en el Estado, en un contexto donde el narcotráfico ha dejado profundas secuelas sociales y políticas.

🌐 Juan Orlando Hernández asegura que la justicia de Estados Unidos ha “anulado” su condena



Contacto

 @zovatto55

 latamasesoria@latamae360.com

 www.linkedin.com/in/danielzovatto360